

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO**



“Al servicio de la justicia y de la paz social”

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL**

PROCESO	EJECUTIVO
DEMANDANTE	BANCO DAVIVIENDA S.A.
DEMANDADOS	REMY I.P.S. S.A.S., CAROLINA HOLGUÍN TAFUR y JUAN CARLOS TRUJILLO VELÁSQUEZ
INSTANCIA	SEGUNDA –APELACIÓN AUTO-
PROCEDENCIA	JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
RADICADO	05001 31 03 001 2021 00359 01 INTERNO 2022-250
PROVIDENCIA	AUTO INTERLOCUTORIO N°048
TEMAS Y SUBTEMAS	LAS MEDIDAS CAUTELARES. LAS CAUCIONES Y SU MONTO PARA IMPEDIR EL DECRETO O PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA
DECISIÓN	MODIFICA
MAGISTRADA	MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO
PONENTE	

Medellín, treinta y uno de marzo (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Procede el Tribunal a decidir el recurso de apelación formulado por el apoderado judicial de la codemandada REMY I.P.S. S.A.S., en el proceso de la referencia, frente al auto de fecha 29 de octubre de 2021, dictado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Medellín, mediante el cual se fijó el monto de la caución pedida por la recurrente para impedir el decreto o la práctica de las medidas cautelares, petición elevada con fundamento en el artículo 602 del C.G.P.

I. ANTECEDENTES

El Banco Davivienda S.A. promovió demanda ejecutiva en contra de REMY I.P.S. S.A.S. y de los señores CAROLINA HOLGUÍN TAFUR y JUAN CARLOS

TRUJILLO VELÁSQUEZ, con fundamento en los pagarés que se identifican con los N° 900723 y 9362017980, aportados como anexo de la demanda, pretendiendo que se libre mandamiento de pago en su favor por la suma de \$202.526.775 por concepto de capital y de \$4.855.934 por concepto de intereses en relación con el pagaré N°900723; y por la suma de \$537.197.573,73 por concepto de capital y de \$25.816.050,38 por concepto de intereses con fundamento en el pagaré N°9362017980 (Archivo digital 13/Carpeta 01.Primer Instancia).

Previo a que se hiciera pronunciamiento en relación con la demanda¹, concurrió la codemandada REMY I.P.S. S.A.S. actuando a través de apoderado judicial, a solicitar que se fije caución para impedir el decreto y práctica de las medidas cautelares (Archivo digital 21/Carpeta 01.Primer Instancia), procediendo luego, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Medellín a librar mandamiento de pago en contra de todos los demandados, tal y como fue solicitado en el libelo genitor (cfr. Archivo digital 22/Carpeta 01.Primer Instancia); seguidamente, en auto de 29 de octubre de 2021, se pronunció respecto a la solicitud efectuada por la codemandada, teniéndola notificada por conducta concluyente y fijando la suma de \$1.490'130.887 como monto de la caución que debe prestar la demandada para evitar la práctica de los embargos y secuestros pedidos por la demandante (Archivo digital 23/Carpeta 01.Primer Instancia y archivo digital 02/Carpeta medidas).

El apoderado de la parte demandada presentó solicitud de aclaración frente al auto de 29 de octubre de 2021 (Archivo digital 03/Cuaderno Medidas), la cual fue resuelta a través de proveído de 22 de noviembre de 2021 (Archivo digital 05/Cuaderno Medidas), providencia que fue debidamente notificada mediante la inserción en estados de 16 de noviembre de 2021 y en la que no se accedió a la solicitud, procediendo entonces el apoderado judicial de la parte demandada a presentar recurso de apelación frente a dicha decisión; reclamando reducción del monto de la caución al estimar que, el juez debe realizar un ejercicio de interpretación del estado actual de la ejecución porque

¹ El auto que libró mandamiento de pago data del 29 de octubre de 2021 (Archivo digital 22/Carpeta 01.Primer Instancia) y la solicitud de la codemandada Remy I.P.S. S.A.S. fue elevada el día 27 de septiembre de 2021 (Archivo digital 21/Carpeta 01.Primer Instancia)

conforme expresó la codemandada al dar contestación a la demanda, ha realizado importantes abonos a la suma que se le reclama y porque la caución fijada no se armoniza con los preceptos procesales que establecen dicho mecanismo; pide que se haga uso del artículo 4° de la Constitución Política aplicando la excepción de inconstitucionalidad del artículo 602 del C.G.P. en cuanto a la forma de fijación de la caución porque en este caso sería injusto tener que pagar una póliza en cuantía de 1.490 millones de pesos cuando existe fundamento certero para acoger las excepciones planteadas. A lo anterior, le agrega la afirmación en el sentido de indicar que el valor fijado no corresponde a lo dispuesto por la ley porque sobrepasa en trescientos millones de pesos el valor que arroja la aplicación de la norma; ya que efectuados los cálculos obtiene una suma de \$1.155'594.499,66, cuando el juzgado fijó la suma de \$1.490'130.887.

Por los argumentos expuestos, pide que se revoque la providencia apelada, para que en su lugar se reajuste el valor de la caución conforme a los valores que refleja ciertamente la ejecución o para que se fije un valor mucho menor conforme al estado actual del proceso frente al debate propuesto respecto de las excepciones planteadas, pidiendo además que se modifique el término para prestar la caución porque estima que 5 días es poco para obtener los recursos que permitan prestar la misma (Archivo digital 11/Cuaderno Medidas).

Del recurso se corrió traslado a la parte demandante, quien se opuso a la prosperidad del mismo, siendo enfática en indicar que el recurso resulta extemporáneo, situación frente a la cual acertadamente se pronunció el despacho de primera instancia y refiriendo en relación con el monto de la caución fijada en que su contraparte no está teniendo en cuenta para el cálculo de la misma, los intereses moratorios (Archivo digital 23/Cuaderno Medidas).

El recurso de apelación fue concedido mediante auto de 10 de junio de 2022, luego de desafortunadas actuaciones del juzgado de primera instancia que confundieron el trámite y no permitieron que siguiera su curso, tales como un control de legalidad que dejó sin valor varias providencias entre ellas la apelada, auto que luego fue dejado también sin valor al resolver un recurso de reposición; en últimas, apenas el 28 de noviembre de 2022 fue remitido el

expediente a esta Corporación para desatar la alzada (Cfr. archivos digitales 47, 94 (sic), 34 y 47/Cuaderno Medidas).

II. CONSIDERACIONES

LAS MEDIDAS CAUTELARES.

Por sabido se tiene que las medidas cautelares en el proceso civil están configuradas para asegurar el cabal cumplimiento de las decisiones que se adopten al interior del mismo, principalmente, en la providencia que resuelva las pretensiones del juicio. El concepto doctrinario más autorizado en materia procesal enseña que la finalidad de las cautelas es la de evitar *“aquellas alteraciones en el equilibrio inicial de las partes que pueden derivar de la duración del proceso”*.²

La Corte Constitucional también ha tenido la oportunidad de exponer lo siguiente sobre las medidas cautelares. Así en la Sentencia T 379 de 2004, expresó:

(...) son instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada. Por ello, esta Corporación señaló, en casos anteriores, que estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la decisión que se adopte, porque los fallos serían ilusorios si la ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o afectación del derecho controvertido.

El régimen de las medidas cautelares es taxativo y de interpretación restringida, en aras de limitar la afectación de los bienes de las personas demandadas en un juicio. La afectación de limitar el dominio de las personas respecto de sus bienes, es facultad exclusiva del legislador, mediante normas procesales que son de orden público, y por tanto no son disponibles ni por las partes, ni mucho menos por el Juez. Dicha idea ha sido recogida por la doctrina, así: *“Tampoco se ha dejado librada su procedencia y oportunidad al criterio del Juez, sino que se las ha autorizado expresamente en cada caso, de*

² CARNELUTTI, Francesco. *Derecho y proceso*. Buenos Aires: E.J.E.A. 1971, pag. 415.

donde resulta que por su carácter excepcional las disposiciones que a ellas se refieren son de interpretación restrictiva”³

Como características de la medida cautelar es adecuado indicar que consiste generalmente en un acto jurisdiccional, ya que por medio de ésta se cumple una de las funciones del juez, que es asegurar el cumplimiento de las decisiones judiciales. También se caracterizan las medidas por ser instrumentales o accesorias, ya que si se miran individualmente no tienen sentido o efecto práctico. La provisionalidad como característica es corolario de la anterior, ya que sólo persisten mientras esté en curso el proceso y después de éste en casos especiales.

LAS CAUCIONES.

Hernando Morales Molina definió las cauciones al interior del proceso civil como *“medidas cautelares que previenen los efectos dañosos de ciertos actos procesales”⁴*. Señaló además que, el instituto de las cauciones y contra cautelas, tal y como fue dispuesto, encuentra inspiración en las lecciones del procesalista italiano Piero Calamandrei.

Consultada entonces la doctrina de Calamandrei, se obtienen importantes aportes que orientan la resolución de problemas jurídicos planteados con ocasión de la aplicación práctica de la institución de las caucione; indica que Caución es la *“prestación de la cual se ordena al interesado como condición para obtener una ulterior providencia judicial”* y *“funcionan como aseguramiento preventivo del eventual derecho al resarcimiento de los daños, que podrán surgir si en el juicio definitivo la medida provisoria es revocada, a favor de aquel contra quien ha sido ejecutada”⁵*

Es claro que la caución exigida para impedir que se practiquen embargos y secuestros o para el levantamiento de las medidas cautelares, sirve para

³ CHIOVENDA, Giuseppe. *Principios de derecho procesal civil*, traducción de la 3 edición, pagina 279.

⁴ MORALES MOLINA, Hernando. *Curso de derecho procesal civil*. Editorial ABC. Bogotá 1983, Octava edición, parte general, pag. 658.

⁵ CALAMANDREI. Piero. *Providencias cautelares*. Traducción de Santiago Sentis Melendo. Editorial Bibliográfica Argentina. Buenos Aires 1984, pag. 63 a 64.

asegurar el cumplimiento de la eventual sentencia favorable al demandante o la indemnización de los perjuicios cuando no se pueda cumplir el fallo.

CASO CONCRETO

Teniendo claro que el motivo de inconformidad expuesto por la recurrente frente al auto de fecha 29 de octubre de 2021, refiere a la cuantía de la caución que le fue fijada al resolverle la solicitud que elevó con fundamento en el artículo 602 del C.G.P. para evitar el decreto o consumación de las medidas cautelares, recurso a través del cual cuestiona de paso el cálculo que se hizo para determinarla, se ocupará entonces el Tribunal de resolver el tema, dejando claro que aunque el inciso 3° de la regla 2ª del artículo 322 del Código General del Proceso refiere a que la apelación de una providencia comprende la de aquella que resolvió sobre la complementación, lo cierto es que de los argumentos expuestos por la parte apelante, no se evidencia inconformidad alguna respecto a lo que se trató en la providencia que resolvió la solicitud de *“adición, complementación, aclaración o corrección”* como así se pidió, del auto proferido el 29 de octubre de 2021, lo que se traduce en que no se está cuestionando a través de este recurso, la forma en que debe prestarse la caución.

Con esta claridad, tenemos que el motivo de la discusión que se suscita implica tener en consideración que en el proceso ejecutivo, por así permitirlo el Estatuto Procedimental, el demandado tiene la posibilidad de desplegar ciertas actuaciones en relación con las medidas cautelares, incluso solicitar al juez que le exija a la parte demandante prestar caución para responder por los perjuicios que se causen con la práctica de las medidas o como en este caso, solicitar que a su cargo se fije el monto de una caución para impedir la práctica de las ya decretadas, llegando incluso hasta la posibilidad de pedir el levantamiento de las mismas. En el caso concreto, basta remitirse al contenido del artículo 602 del Código General del Proceso, norma que señala

“El ejecutado podrá evitar que se practiquen embargos y secuestros solicitados por el ejecutante o solicitar el levantamiento de los practicados, si presta caución por el valor actual de la ejecución aumentada en un cincuenta por ciento (50%).

Cuando existiere embargo de remanente o los bienes desembargados fueren perseguidos en otro proceso, deberán ponerse a disposición de éste o del proceso en que se decretó aquel". (resaltado intencional)

La norma citada, en el aparte que ha sido destacado con negrilla, es clara en establecer que podrá impedirse el decreto o práctica de las medidas cautelares, si se constituye caución por el valor actual de la ejecución aumentado en un cincuenta por ciento (50%); siendo clara, específica y sin lugar a interpretación distinta; de manera que a través de una simple operación matemática puede determinarse si la caución fijada por el juzgado de primera instancia se adecúa a la norma.

Basta entonces con remitirse al auto de 29 de octubre de 2021, mediante el cual se libró mandamiento de pago en favor del Banco Davivienda S.A. y en contra de REMY I.P.S. S.A.S., así como de los señores Carolina Holguín Tafur y Juan Carlos Trujillo Velásquez, siendo REMY I.P.S. S.A.S , aquí apelante, frente a la cual se libró orden de apremio por todas las sumas de dinero perseguidas, para advertir que en dicha providencia el mandamiento de pago fue librado por valor de \$770'396.333,11, -valor que arroja la sumatoria del capital e intereses que comprenden los dos pagarés base de recaudo- (Archivo digital 22/Carpeta 01.Primer Instancia), suma que aumentada en un cincuenta por ciento como lo establece la norma, porcentaje que en este caso equivale a \$385'198.166,55, equivaldría a \$1.155'594.499,66.

Entonces, habiendo fijado el juez de primera instancia la cuantía de la caución en \$1.490'130.887, en el auto que es objeto de alzada, ésta será reducida al valor que arroja el cálculo efectuado conforme a la disposición normativa del artículo 602 del C.G.P.; lo que se traduce en que deberá MODIFICARSE en este aspecto la decisión que es objeto de alzada, y disponer que la caución que debe constituir la demandada REMY I.P.S. S.A.S., deberá constituirla en la forma que considere pertinente y por valor de \$1.155'594.499,66.

Ahora en cuanto al término para prestar la caución concedido a la apelante cuya ampliación se pidió también a través de la alzada, atendiendo a la

elevada suma de dinero que corresponde a la misma y por así permitirlo el artículo 603 del C.G.P. en su inciso segundo, se fija el término de quince (15) días para que sea prestada la misma.

Por último, no puede dejar pasar esta Sala, lo acontecido en este proceso y que conlleva la dilación en el tiempo para la resolución de la causa, originada en las descontextualizadas y equivocadas decisiones adoptadas por el Juzgado de primer grado, confundiendo las solicitudes de las partes y obligándose incluso a dejar sin valor sus mismas providencias, para concluir en la tramitación del proceso por la senda que inicialmente fijaron las mismas partes, por lo que se llama la atención del Señor Juez Primero Civil del Circuito de Medellín para que en adelante se eviten este tipo de actuaciones y se procure por la gestión ágil de los procesos, pues aunado a lo anterior, pese a que luego de aclarar el asunto objeto del recurso de alzada, se impartió orden a la Secretaría del Despacho en el mes de junio de 2022 mediante auto de 9 de junio de 2022 (Archivo digital 47/Cuaderno de Medidas), fue necesario otro pronunciamiento el día 9 de septiembre de 2022 ordenando la remisión del expediente a esta Corporación y lo que agrava aún más la situación es que esto se cumple pasados 2 y meses y medio, pues sólo se remitió el 28 de noviembre de 2022, siendo este el motivo por el cual apenas se emite pronunciamiento frente al recurso de apelación de una providencia que data del año 2021 (Cfr. archivos digitales 47, 58 y 94 (sic)/Cuaderno de Medidas).

CONCLUSIÓN

Se MODIFICARÁ la decisión que es objeto de alzada para disponer que la caución que debe constituir la demandada REMY I.P.S. S.A.S., deberá constituir la en la forma que considere pertinente y por valor de \$1.155'594.499,66 en el término de quince (15) días. Dadas las resultados de la apelación, no habrá lugar a imponer condena en costas.

En merito de lo expuesto, el **Tribunal Superior de Medellín en Sala Unitaria de Decisión Civil**,

III. RESUELVE

PRIMERO. MODIFICAR el auto de fecha 29 de octubre de 2021, proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Medellín, en lo que se refiere al monto de la caución que debe ser otorgada por REMY I.P.S. S.A.S. y el término con el que cuenta para constituir la.

SEGUNDO. FIJAR el monto de la caución, en la suma de \$1.155'594.499,66 la cual deberá ser otorgada por la parte demandada en alguna de las formas previstas por la ley en el término de quince (15) días.

TERCERO. ABSTENERSE de imponer condena en costas.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE


MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO
Magistrada

(Firma escaneada de conformidad con el artículo 105 del C.G.P. en concordancia con la Ley 2213 de 2022)